

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Auto No. 580.

ACCIÓN	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2020-000059-00
DEMANDANTE:	CARLOS ALBERTO TORRES LUNA
DEMANDADO:	NACIÓN – REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

I. ANTECEDENTES.

1. Trámite del proceso.

En el presente caso mediante auto de 13 octubre de 2020 (i) se declaró que la Registraduría Nacional del Estado Civil en su condición entidad accionada no presentó contestación de la demanda, (ii) se procedió a fijar el litigio, (iii) se incorporaron las pruebas documentales aportadas con la demanda y (iv) finalmente se dispuso que una vez se encontrara en firme el pronunciamiento mediante auto se correría traslado a las partes para alegar de conclusión teniendo en cuenta que el proceso se enmarca dentro de las causales establecidas legalmente para proferir sentencia anticipada.

2. Intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El 20 de octubre de 2020, con posterioridad al término de traslado para contestar la demanda y dentro del término de ejecutoria del auto de 13 de octubre de 2020 la Registraduría Nacional del Estado Civil radicó escrito mediante el cual presentó “*contestación a la demanda*”.

En el escrito de defensa, la entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que el cargo desempeñado por el demandante tenía la naturaleza de libre nombramiento y remoción y por ende el Registrador Nacional del Estado Civil tenía la facultad para separarlo del servicio en uso de la facultad discrecional.

Adicionalmente, formuló la excepción de falta de competencia en razón de la cuantía alegando que a la fecha de presentación de la demanda, el 6 de julio de 2020, la cuantía del proceso excedía los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes necesarios para fijar la competencia en los jueces administrativos del circuito de Cali.

3. Nulidad procesal presentada por el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ.

El 4 de noviembre de 2020 el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ quien se identificó como el profesional en derecho nombrado en reemplazo del accionante en el cargo de “*Delegado Departamental 0020-004*” presentó escrito que denominó como contestación de la demanda y solicitud de nulidad procesal con el propósito de “*preservar derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia*”.

Para el efecto, el interviniente aportó copia de la Resolución N° 436 de 20 de enero de 2020 por medio del cual el Registrador Nacional del Estado Civil efectuó su nombramiento en el cargo de “*Delegado Departamental 0020-004*” y la respectiva acta de posesión en el cargo proferida el 3 de febrero de 2020.

En primer término, se advierte que el cargo de “*Delegado Departamental 0020-004*” corresponde al empleo de mayor jerarquía existente dentro de la planta de cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Valle del Cauca motivo por el cual el Juez natural para definir las controversias jurídicas que afecten su nombramiento corresponde en primera instancia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en segunda instancia al Consejo de Estado.

Para sustentar la anterior afirmación, se sostiene que conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 152 del CPACA los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de naturaleza laboral cuya cuantía supera los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes deben resolverse en primera instancia por parte de los Tribunales Administrativos.

En consecuencia, solicita que se disponga la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, so pena de configurarse una “*vulneración al debido proceso por falta de competencia*”

En segundo lugar, el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ afirma que en el presente caso se configura la causal de nulidad procesal consagrada en el numeral 8¹ del artículo 133 del CGP al no habersele notificado personalmente la demanda.

Frente a este aspecto particular, el memorialista considera que al ser nombrado en reemplazo del accionante en el cargo de “*Delegado Departamental 0020-004*” tiene un interés legítimo y directo en el resultado del proceso y por ende debía ser notificado del auto admisorio de la demanda de acuerdo al señalado por el numeral 3 del artículo 171 del CPACA.

II-. CONSIDERACIONES:

1. Extemporaneidad de la intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En primer término, una vez revisadas las actuaciones procesales advierte que la contestación de la demanda presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil fue presentada de forma extemporánea el 20 de octubre de 2020.

¹ 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

En efecto, en el presente caso conforme a la constancia de envío obrante en el archivo N° 6 del expediente digital se advierte que la demanda fue notificada personalmente a la entidad accionada el 4 de agosto de 2020.

De acuerdo a la constancia secretarial registrada en el archivo N° 7 del expediente digital, el término de treinta (30) días de traslado de la demanda transcurrió en el periodo comprendido entre el 10 de agosto y el 21 de septiembre de 2020. Durante dicho término la entidad accionada se abstuvo de presentar contestación a la demanda.

Al corroborarse esta situación, mediante auto de 13 de octubre de 2020 se declaró que la Registraduría Nacional del Estado Civil no contestó la demanda y ante el mérito del proceso para proferir sentencia anticipada se procedió a incorporar las pruebas documentales aportadas con la presentación de la demanda.

Del anterior recuento procesal, se infiere que el escrito radicado por la entidad accionada el 20 de octubre de 2020 corrobora la falta de contestación de la demanda durante el termino legal de traslado y adicionalmente su extemporaneidad impide la valoración de los argumentos defensa expuestos en la intervención.

Adicionalmente, se advierte que el escrito no fue presentado a título de recurso en contra del auto de 13 de octubre de 2020 o como una solicitud de nulidad procesal que controvierta la declaración de falta de contestación de la demanda efectuada en dicha providencia.

En consecuencia, al no existir una oposición procesal de la entidad accionada a la decisión adoptada en el auto de 13 de octubre de 2020, resulta improcedente efectuar un pronunciamiento adicional frente al escrito de contestación de la demanda presentado de forma extemporánea el 20 de octubre de 2020.

2. Resolución de las causales de nulidad procesal presentadas por el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ.

2.1. Falta de competencia factor por el factor funcional.

Para fundamentar la causal de nulidad procesal se sostiene que conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 152 del CPACA los Tribunales Administrativos deben conocer en primera instancia de los procesos de *“nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”*.

En este contexto, se afirma que en el presente caso la cuantía debe fijarse con fundamento en los salarios dejados de percibir por el accionante desde la fecha de su retiro del servicio hasta el momento de presentación de la demanda, teniendo en cuenta que pretende la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia del cargo desempeñado y en consecuencia su reintegro a la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En la presentación de la demanda, el accionante fijó la cuantía en una suma de dinero equivalente a cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos dieciséis pesos (\$49.876.416) señalando que correspondía a la sumatoria del ingreso mensual que percibía por el ejercicio del cargo correspondiente a \$12.469.104 hasta la presentación de la demanda.

En consecuencia, y dado que para el año 2020 los 50 salarios mínimos mensuales fijados en la ley como límite para determinar la competencia en primera instancia de los Tribunales Administrativos equivalían a \$ 43.890.100 se tiene que a la fecha de presentación de la demanda la cuantía del proceso superaba dicho límite.

2.2. Improcedencia de la declaratoria de nulidad procesal por falta de competencia funcional.

Aunque con la entrada en vigencia de la ley 2080 de 2021 se introdujeron modificaciones en el proceso contencioso administrativo que afectan las reglas de establecidas para fijar la competencia, resulta igualmente cierto que este conjunto de normas solo entrará en vigencia a partir del 25 de enero de 2022.

En efecto, el artículo 86 de la ley 2080 de 2021 estableció el régimen de entrada en vigencia de la norma bajo los siguientes lineamientos:

(...) ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, **con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.**

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.
(...) Subrayado por el Despacho.

Conforme a lo estipulado por el inciso 1 de la norma transcrita, resulta claro que las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos solo entrarán en vigencia luego del transcurso de 1 año contado desde el momento de su publicación en el diario oficial N° 51568 el 25 de enero de 2021².

Por esta razón el Despacho resolverá la solicitud de nulidad procesal formulada por la parte accionada tomando como fundamento las normas actualmente vigentes para fijar la competencia en razón de la cuantía, contenidas en los textos originales de los artículos 152, 155 y 157 del CPACA.

En este contexto, se tiene que para efectos de determinar la cuantía en medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho de naturaleza laboral en los que se pretenda el reconocimiento de prestaciones periódicas *“la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda”*.

² <http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml?jsessionid=1ac756a20a7697307dea56153660>

La anterior regla se encuentra contenida en el inciso final del artículo 157 del CPACA en los siguientes términos:

(...) ARTÍCULO 157. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.(...)

La Jurisprudencia del Consejo de Estado al referirse al contenido de la norma objeto de análisis en providencia de 5 de abril de 2018³ estableció lo siguiente:

(...) Los procesos de nulidad y restablecimiento en los que se ventilan sanciones de destitución, suspensión o, en general, **asuntos en los que la consecuencia sea la dejación, entrega o retiro del cargo**, la cuantía deberá establecerse con la sumatoria de los salarios y emolumentos que se hayan generado desde el momento en que surgió el retiro del servicio y durante los cuatro meses que se tiene para interponer la demanda, es decir lo causado durante el término de caducidad del medio de control (...) Negrillas dentro del texto original. Subrayado por el Despacho.

De acuerdo a la interpretación efectuada por la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado resulta claro que en los asuntos en que la “consecuencia sea el retiro del cargo” la cuantía debe fijarse con base en lo dejado de percibir por la persona afectada a partir de la separación del servicio y durante el término de caducidad para ejercer el respectivo medio de control.

Ahora bien, mediante el Decreto 564 de 28 de marzo de 2020 se dispuso la suspensión de los términos de caducidad y prescripción que se encontraban en curso al momento de la suspensión de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura desde el 16 de marzo de 2020:

(...) Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

El conteo de los términos prescripción y de caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el

³ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-28-000-2017-00041-00(4521-17)

Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente. (...)

Bajo en el anterior contexto normativo, se tiene que en el presente caso la notificación del acto administrativo acusado se produjo el 3 de enero de 2020, motivo por el cual el término de 4 meses para ejercer el derecho de acción vencía en principio el 4 de mayo de 2020.

Sin embargo, se advierte que el término de caducidad se suspendió al configurarse el supuesto de hecho previsto en el inciso 1 del artículo 1 del Decreto 564 de 2020.

En efecto, el plazo para interponer la demanda se suspendió a partir del 16 de marzo de 2020 momento en el que habían transcurrido 71 días y restaban 49 días para la configuración del fenómeno de la caducidad.

Con base en los antecedentes expuestos, se tiene que el conteo del término de caducidad de 49 días se reanudó el 1 de julio de 2020 en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 1⁴ de Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020.

A su turno, la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal el 6 de julio de 2020 teniendo en cuenta que el término restante de 49 días vencía el 19 de agosto de 2020.

De los supuestos de hecho relacionados se puede corroborar que en razón de la suspensión de términos dispuesta en el Decreto 564 de 2020 el término de caducidad trascurrió entre el 4 de enero y el 15 de marzo de 2020 y desde el 1 de julio hasta el día anterior a la presentación de la demanda el 5 de julio de 2020 para un total de 76 días.

Ahora bien, teniendo en cuenta los parámetros determinados por el precedente del Consejo de Estado que determinan que en los eventos de retiro del servicio la cuantía del proceso corresponde a *“lo causado durante el término de caducidad del medio de control”* en el caso concreto este presupuesto procesal se debe fijar conforme a lo dejado de percibir por el accionante durante el periodo de caducidad de 76 días transcurrido entre la notificación del acto administrativo acusado y la presentación de la demanda.

De acuerdo a lo expuesto con la demanda (fl. 53 archivo N° 1) y conforme al certificado salarial obrante al folio 853 del archivo N° 2 del expediente digital expedido por el Coordinador del Grupo de Salarios y Prestaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil se corrobora que el accionante percibía un ingreso mensual de \$ 12.469.104. Bajo este presupuesto durante el término de caducidad de 76 días el accionante dejó de percibir una suma de dinero equivalente a \$ 36.588.396.

En el año 2020 los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes fijados en el CPACA como límite para determinar la competencia en primera instancia de los Juzgados Administrativos equivalían a \$ 43.890.100, motivo por el cual se concluye que a la fecha de presentación de la demanda este Juzgado contaba con la competencia funcional necesaria para conocer el asunto y dar trámite al proceso.

⁴ Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo.

Las razones determinadas resultan suficientes para negar la solicitud de nulidad procesal formulada por el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ alegando una presunta falta de competencia por el factor funcional.

2.3. Nulidad procesal por falta de notificación de la demanda al señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ.

El señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ afirma que su nombramiento en el cargo que desempeñaba el accionante denominado “*Delegado Departamental 0020-004*” le otorga un interés directo en el resultado del proceso teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda se dirigen a obtener el reintegro a dicho empleo.

En consecuencia, se sostiene que la falta de notificación de la demanda conllevó a la configuración de la causal de nulidad procesal consagrada el numeral 8⁵ del artículo 133 del CGP.

En primer término, con el propósito de resolver la solicitud de nulidad formulada es necesario precisar que el litisconsorcio necesario es una institución que tiene como propósito vincular al proceso a un número plural de personas -ya sea como parte activa o pasiva- conectados por una única “*relación jurídico-sustancial*”, a fin de proferir una decisión uniforme para todos los que la integran⁶ lo cual, hace indispensable y obligatoria su comparecencia. Así, jurisprudencialmente se ha dicho que la necesidad de vincular a determinada persona a un proceso surge de la imposibilidad de resolver la cuestión litigiosa sin su comparecencia, al extenderse a ella de manera uniforme los efectos sustanciales del eventual fallo⁷.

De otro lado, el concepto de “*tercero*” se refiere a aquellas personas que, con posterioridad al establecimiento de la relación jurídico-procesal, por disposición legal o por orden del juez, participan en el mismo, en una calidad diversa a la de litisconsorte necesario, ya que se pueden (o no) beneficiar o perjudicar con la sentencia⁸. Por ello, el juez cuenta con la facultad de decidir la procedencia de la intervención del tercero, sin que ello le resulte imperativo.

En este contexto, la jurisprudencia del Consejo de Estado⁹ ha señalado que la vinculación de un tercero se encuentra condicionada a la existencia de un interés directo en el resultado del proceso, el cual debe ser concreto, personal, serio y actual.

En el presente caso una vez revisados los documentos allegados al plenario, se advierte que el nombramiento del señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ en el

⁵ 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

⁶ CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 16 de octubre de 2020. Radicado No. 53025.

⁸ Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Bogotá D.C., DUPRE Editores, 2005, p. 323

⁹ Sección Primera, Auto de 26 de marzo de 2021, Radicación número: 66001-23-31-000-2008-00062-02, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

cargo que ocupa el accionante no resulta suficiente para concederle la categoría de litisconsorte necesario o de tercero con interés en el resultado del proceso.

En efecto, el acto administrativo acusado se encuentra contenido en la resolución N° 004 de 2 de enero de 2020, por medio del cual el Registrador Nacional del Estado Civil declaró insubsistente el nombramiento del señor CARLOS ALBERTO TORRES LUNA en el cargo “*Delegado Departamental 0020-004*” perteneciente a la planta global de la entidad al considerarse al empleo como de libre nombramiento y remoción (fl. 802 archivo N° 2 expediente digital).

Con la demanda el señor CARLOS ALBERTO TORRES LUNA pretende que se declare la nulidad del acto referenciado para lo cual sostiene que el empleo no tiene la naturaleza de libre nombramiento remisión y en consecuencia solicita que se ordene su reintegro al mismo cargo o a uno de superior categoría. (fl. 2 archivo N° 2 expediente digital).

Posteriormente, el Registrador Nacional del Estado Civil profirió la resolución N° 436 de 20 de enero de 2020 por medio de la cual se efectúa el nombramiento del señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ en el empleo de “*Delegado Departamental 0020-004*” señalando que el cargo pertenece al nivel directivo de la entidad y por ende tiene la categoría de libre nombramiento y remoción (fl. 63 archivo N° 13 expediente digital).

En el artículo 4 de la parte resolutive del pronunciamiento se señaló que el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ tomaría posesión del cargo ante el Gobernador Departamental donde fuere asignado. En cumplimiento de lo anterior se encuentra que el interesado se posesionó ante el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca el 3 de febrero de 2020 (fl. 64 archivo N° 13 expediente digital).

Los documentos relacionados permiten corroborar que el empleo que desempeñaba el ahora accionante de “*Delegado Departamental 0020-004*” pertenece a la planta global de cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y hace parte del nivel directivo de la institución.

En consecuencia, se tiene que aunque el nombramiento del señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ se efectuó en un cargo con la misma denominación al que desempeñaba el accionante CARLOS ALBERTO TORRES LUNA y posteriormente fue delegado para el cumplimiento de sus funciones en el Departamento del Valle del Cauca, esta situación no implica que su designación se haya efectuado a título de remplazo en el empleo que desempeñaba el último de los mencionados.

Efectivamente, en su nivel central, la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con una planta de personal global y flexible de la cual se desprende la facultad de modificar las condiciones laborales de los servidores públicos, distribuir los cargos, y de ubicar su personal de acuerdo con las necesidades del servicio.

De esta forma, la naturaleza del empleo y la estructura de la planta de cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil conlleva a que un eventual reconocimiento de la pretensión de reintegro formulada con la demanda no se efectuó frente al cargo que actualmente desempeña el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ, máxime si se tiene en cuenta que su vinculación jurídica con la entidad se deriva de un acto administrativo independiente y posterior al que declaró la insubsistencia del accionante.

En análisis expuesto permite concluir que en el presente caso no se configuró la causal de nulidad estipulada en numeral 8 del artículo 133 del CGP toda vez que la relación que ostenta el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ con la Registraduría Nacional del Estado Civil se deriva de un vínculo jurídico independiente al que esta entidad sostuvo con el ahora accionante.

Así las cosas, se procederá a negar la causal de nulidad formulada por el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ al corroborarse que no tiene la categoría de litisconsorte necesario o de tercero con interés directo en el resultado de la sentencia que resuelva el fondo del asunto, situación que conlleva a su no reconocimiento como parte o interviniente del proceso.

En consecuencia se,

RESUELVE

PRIMERO. NO DAR TRÁMITE a la contestación de la demanda presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de nulidad procesal formuladas por el señor RODRIGO MOLANO GONZÁLEZ por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: UNA VEZ en firme la presente providencia se continuará con el trámite del proceso.

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 186 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 46 de la ley 2080 de 2021 este juzgado comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

✓ Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

MAT

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

Firmado Por:

**Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

af154cc0fb08ae0ba61d64596919c65476b63ccbd161bc1cafd90a08cdfa1d04
Documento generado en 24/11/2021 10:22:09 AM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**